

Instituciones tóxicas y debilitamiento de la gobernanza

El desasosiego y la angustia generalizada que vive nuestra sociedad por la debacle de la gobernanza generan un estado de ánimo de desconfianza y de falta de credibilidad en la gestión pública, que son una amenaza para lograr los cambios estructurales necesarios para la transformación del País. La normalización de las malas prácticas de gobierno que le abren camino a la corrupción no puede continuar siendo la regla que guíe la función pública. Los esquemas de nombramientos y contrataciones en el gobierno siguen teniendo como norma el amiguismo, el nepotismo y el clientelismo político que, en gran medida, son responsables del descalabro social y económico que vivimos.

Los recientes eventos que salen a la luz pública luego de la renuncia de la secretaria de Hacienda y el esquema de malversación de fondos en el programa Crece 21 en el Departamento de Educación han develado de manera contundente las relaciones contractuales incestuosas y el nivel tóxico de las instituciones gubernamentales basadas en vínculos de familiaridad, amiguismos y la protección de los intereses de los militantes en el partido político que le

abren espacio a las prácticas de corrupción. En nuestra sociedad se han tornado como aceptables las contrataciones de gobierno entre amigos, correligionarios y familiares con vínculos de consanguinidad o de un tronco común que se reparten entre sí —en complicidad con empresarios privados— los contratos de gobierno. Estas conductas no son saludables ni aceptables en la administración pública porque se apartan de las normas, se alejan de los criterios de integridad pública y deben ser condenadas tanto por la ley como por la moral para garantizar la protección del interés público, el respeto al estado de derecho y los derechos individuales fundamentales de los ciudadanos.

Estas prácticas malsanas son causantes de la crisis de gobernanza que padecemos, lo que pone en riesgo la credibilidad necesaria para enderezar las finanzas públicas y las oportunidades de recuperación de la maltrecha economía que no logra despuntar. Además, el mal gobierno es responsable del deterioro de las instituciones y junto a la incompetencia de sus líderes, el cortoplacismo impuesto por los objetivos electorales y el creciente menosprecio de los

derechos y libertades individuales ponen en peligro los derechos colectivos y el anclaje de la democracia. No cabe duda de que nuestra democracia no sobrevivirá si quienes gobiernan tratan a los ciudadanos como miembros de una tribu y continúan gobernando a oscuras para facilitar la repartición del botín.

El derecho de los ciudadanos a conocer las normas que se promulgan y las decisiones que toman sus gobernantes, la necesidad de que los gestores públicos actúen conforme a códigos de buen gobierno, la importancia de que las personas tengan la información necesaria para participar en la toma de decisiones así como aquella que requieran y que no entre en conflicto con otros derechos fundamentales, son algunos de los motivos que hacen imprescindible el ejercicio de la transparencia en el ámbito público. Asimismo, otros valores como la integridad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad se convierten en exigibles en toda actuación, especialmente en un momento de creciente presión por la crisis fiscal que vivimos.

Indiscutiblemente la transparencia y la integridad en la aplicación de las normas y la divulgación de información pública veraz y oportuna permitirá generar una mayor capacidad de gobierno y un ambiente propicio para la prevención y solución efectiva

de los problemas que enfrentamos como sociedad. En su obligación de adelantar la transparencia, el gobierno tiene un largo y complejo camino por recorrer. Para lograrlo es necesario adaptar no solo sus estructuras organizativas, sus procesos y tecnologías, sino que urge acompañar este proceso con un profundo cambio cultural en la forma de gobernar, de modo que los valores y los principios rectores que sirven de pilares a la buena gobernanza pública sirvan de mapa para satisfacer las necesidades esenciales de la sociedad.

En este contexto histórico de escasez de recursos y problemas sociales de gran magnitud, la transparencia y la rendición de cuentas se reafirman como los principios de buen gobierno más valiosos. Una mayor apertura de los asuntos públicos, combinada con políticas públicas que faciliten el acceso y especialmente la comprensión de la información fiscal, contribuirán a robustecer la menuda credibilidad del gobierno e incrementar la legitimidad de sus acciones. Luego de 2017 ha quedado evidenciado que a pesar de la mala gobernanza que vive la Isla, nuestra gente tiene la resiliencia necesaria para emprender la ruta de la transformación del País. Es hora de que como sociedad les exijamos a los gobernantes no más opacidad y corrupción en la gestión pública.



**Dra. Eneida
Torres
de Durand**

Directora
Ejecutiva Centro
de Gobernanza
Pública y
Corporativa